

	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Cali	veinticinco (25) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

Auto Interlocutorio N° 131.

MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE	COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA.
DEMANDADO	MUNICIPIO DE CANDELARIA
RADICADO	76001-33-33-001-2019-00178-00

I. ASUNTO A DECIDIR

Con la entrada en vigencia de la ley **2080 de 2021** se introdujeron modificaciones en el proceso contencioso administrativo que afectan el trámite de las excepciones previas y que conllevan a que su resolución se efectúe con anterioridad a la realización de la audiencia inicial.

La Jurisprudencia del Consejo de Estado¹ al referirse a la entrada en vigencia de la ley procesal señala que *“la misma resulta de aplicación inmediata y prevalece sobre las anteriores, a partir de su entrada en vigencia o de la fecha de su promulgación, conforme lo establece el artículo 40 de la Ley 153 de 15 de agosto de 1887 , el cual prevé que “Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir”.*

A su turno el artículo 86 de la ley 2080 de 2021 estableció su régimen de entrada en vigencia bajo los siguientes parámetros:

(...) ARTÍCULO 86. Régimen de vigencia y transición normativa. La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de: los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley.

Las nuevas reglas del dictamen pericial contenidas en la reforma a los artículos 218 a 222 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, e aplicarán a partir de la publicación de la presente ley para los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011 en los cuales no se hayan decretado pruebas.

De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su

¹ CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D. C., ocho (8) de marzo de dos mil dieciocho (2018) CONSEJERA PONENTE: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ REF: Expediente núm. 66001-23-33-000-2017-00474-01.

publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011.

En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtir las notificaciones. (...)

En este contexto, frente al trámite de las excepciones previas, el artículo 36 de la ley 2080 de 2021 que modificó el artículo 175 del CPACA en su párrafo 2 consagra lo siguiente:

(...) PARÁGRAFO 2º. De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo 201A por el término de tres (3) días. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en ellas. En relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas.

Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juez o magistrado ponente las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.

Antes de la audiencia inicial, en la misma oportunidad para decidir las excepciones previas, se declarará la terminación del proceso cuando se advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad.

Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A. (...)

Con base en los anteriores parámetros, atendiendo los postulados del principio de aplicación inmediata de la ley procesal y teniendo en cuenta que en el caso concreto el término de traslado se encuentra debidamente agotado, se procederá a resolver las excepciones previas de acuerdo a lo estipulado en el numeral 2² del artículo 101 del Código General del proceso, esto es, mediante providencia antes de la audiencia inicial.

II-. CONSIDERACIONES:

1. Caducidad de la Acción.

1.1. Pretensiones y hechos de la demanda.

En el presente caso en el escrito de demanda y su reforma la sociedad MARDEN LTDA. pretende la nulidad de los siguientes actos administrativos:

² 2. El juez decidirá sobre las excepciones previas que no requieran la práctica de pruebas, antes de la audiencia inicial, y si prospera alguna que impida continuar el trámite del proceso y que no pueda ser subsanada o no lo haya sido oportunamente, declarará terminada la actuación y ordenará devolver la demanda al demandante.

- Resolución N° 245.10.001-53 de 26 de febrero de 2018 por medio de la cual el municipio de Candelaria impuso una sanción por no declarar el impuesto de industria y comercio durante los años gravables 2011 a 2015.

- Resolución N° 245.10.01-333 de 23 de abril de 2019 por medio de la cual se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto en contra de la resolución N° 245.10.001-53 de 26 de febrero de 2018.

- Liquidación Oficial de Aforo N° 245.10.001-157 de 2 de abril de 2019 por medio de la cual se determinó el impuesto de industria y comercio a cargo de la accionante por los años gravables 2011 a 2015.

- Resolución N° 245.10.001-1507 de 24 de julio de 2019 por medio de la cual se resolvió el recurso de reconsideración formulado en contra de la resolución de aforo.

Los hechos que fundamentan las pretensiones referenciadas son los siguientes:

El 26 de febrero de 2018 el municipio de Candelaria impuso a la sociedad MARDEN LTDA. una sanción por no declarar el impuesto de industria y comercio durante los años gravables 2011 a 2015.

La sanción se determinó en la resolución N° 245.10.001-53 la cual se notificó el 5 de junio de 2018. El 14 de junio de 2018 la entidad sancionada presentó recurso de reconsideración.

El 2 de abril de 2019, la entidad territorial a expidió la Liquidación Oficial de Aforo N° 245.10.001-157 por medio de la cual se determinó el impuesto de industria y comercio a cargo de la accionante por los años gravables 2011 a 2015.

El 17 de junio de 2019, transcurrido un año luego de la interposición del recurso de reconsideración en contra de la resolución sanción de 26 de febrero de 2018, la Sociedad MARDEN LTDA. solicitó al municipio de Candelaria que declarara la configuración del silencio administrativo positivo en aplicación del artículo 734 del Estatuto Tributario.

Posteriormente, el 4 de julio de 2019, la sociedad accionante presentó recurso de reconsideración en contra de la Liquidación Oficial de Aforo N° 245.10.001-157 de 2 de abril de 2019.

El recurso formulado en contra de Liquidación Oficial de Aforo se resolvió a través de la Resolución N° 245.10.001-1507 de 24 de julio de 2019.

Finalmente, mediante Resolución N° 245.10.01-1554 de 27 de agosto de 2019 la entidad territorial negó la solicitud de declaratoria del silencio administrativo positivo afirmando que el recurso de reconsideración se resolvió de forma expresa a través de la Resolución N° 245.10.01-333 de 23 de abril de 2019 la cual se había notificado mediante el envío del documento a la dirección procesal de la ahora accionante.

Para la parte accionante, contrario a lo expuesto por el municipio de Candelaria, la notificación de la resolución de 23 de abril de 2019 que resolvió el recurso de reconsideración no se llevó a cabo en debida forma.

En efecto, de acuerdo a las normas del Estatuto Tributario y a la jurisprudencia del Consejo de Estado la notificación del pronunciamiento que resuelve el recurso de reconsideración debe efectuarse de manera personal previa citación del

contribuyente para que comparezca a la sede de la entidad dentro los diez (10) siguientes al envío de la comunicación.

En el evento en que el destinatario no comparezca a notificarse personalmente del acto administrativo la notificación debe realizarse mediante edicto.

En el presente caso, a juicio de MARDEN LTDA. la entidad accionada no adelantó la notificación a través de los mecanismos legales referenciados ya que no procedió a su citación para efectos de la notificación personal, lo que conllevó a que la diligencia no surtiera efectos y posteriormente a la configuración del silencio administrativo positivo.

1.2. Fundamentos de la excepción de caducidad formulada por el municipio de Candelaria.

En la contestación de la demanda el municipio de Candelaria formuló la excepcion de caducidad indicando que en el presente caso no operó el silencio administrativo positivo alegado por la parte accionante pues a su juicio la Resolución N° 245.10.01-333 de 23 de abril de 2019 que resolvió el recurso de reconsideración fue notificada en debida forma el 3 de mayo de 2019 a traves de envió por correo certificado.

En este contexto, afirma que al momento de la presentacion de la demanda el 19 de septiembre de 2019 se habia vencido el término de cuatro (4) meses consagrado en el artículo 164 del CPACA para la presententacion del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

1.3. Traslado de la excepción previa propuesta.

La parte accionante se pronunció frente a la excepción presentada por el municipio de Candelaria indicando que en el presente caso la notificación de la Resolución N° 245.10.01-333 de 23 de abril de 2019 en realidad se llevó a cabo por conducta concluyente el 19 de septiembre de 2019 al momento de la presentación de la demanda, motivo por el cual resulta improcedente declarar la caducidad de la acción.

Para sustentar la anterior afirmación, la parte accionante afirma que en el expediente administrativo no existe prueba que acredite que fue citada para notificarse personalmente de la Resolución N° 245.10.01-333 de 23 de abril de 2019.

Adicionalmente, advierte que si en gracia de discusión se aceptase que tuvo conocimiento de la resolución N° 245.10.01-333 de 23 de abril de 2019 con la expedición de la resolución de 27 de agosto 2019 que negó la configuración del silencio administrativo positivo, se evidencia que la demanda se presentó dentro de los 4 meses siguientes a la notificación de este último pronunciamiento el 19 de septiembre de 2019.

1.4. Resolución de la excepción de caducidad:

1.4.1. Marco normativo y actos administrativos demandables derivados del procedimiento tributario de aforo.

Los artículos 715 a 719 del Estatuto Tributario disponen que el proceso de aforo tiene como propósito obtener el recaudo de un tributo que no ha sido declarado por parte del sujeto pasivo de la obligación.

El procedimiento se inicia con el denominado emplazamiento para declarar, acto mediante el cual la Administración invita a los sujetos pasivos para que cumplan con su deber de declarar dentro del término de un (1) mes y les advierte de las consecuencias en caso de persistir en la omisión.

El efecto de no presentar la declaración respectiva dentro del término que otorga el emplazamiento, es la imposición de la sanción por no declarar prevista en el artículo 643 ibídem.

Agotado el procedimiento previsto en los citados artículos 643, 715 y 716 del Estatuto Tributario, la Administración, dentro de los cinco años siguientes al vencimiento del plazo señalado para declarar, puede determinar, mediante liquidación oficial de aforo, la obligación tributaria de quien no haya declarado, según lo dispuesto en el artículo 717 ibídem.

En conclusión, se tiene que el procedimiento de aforo comprende 3 etapas, a saber: **(i)** el emplazamiento por no declarar, **(ii)** la sanción por no declarar y **(iii)** la liquidación de aforo.

En este contexto, la Jurisprudencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado³ ha señalado que los actos administrativos de naturaleza definitiva y que en principio son susceptibles de control Jurisdiccional corresponden a las decisiones que imponen la sanción por no declarar y a la que determina el tributo mediante la respectiva liquidación de Aforo junto con los pronunciamientos que resuelven los recursos de reconsideración que se deben formular con el objeto de agotar la actuación administrativa:

(...) En ese procedimiento, los actos administrativos definitivos lo constituyen la resolución sanción por no declarar, la liquidación de aforo, y los actos que resuelvan los recursos que se interpongan contra las mismas, pues en estos se concreta la manifestación de la voluntad de la Administración respecto de la obligación tributaria que recae sobre el contribuyente. Es decir, incorporan un pronunciamiento sobre la existencia de la obligación, el obligado, la cuantía del tributo, y los demás que surjan en el trámite de ese proceso. (...)

Adicionalmente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha determinado que en los eventos en que se solicita a la entidad accionada que declare la configuración del silencio administrativo positivo por la falta de resolución oportuna de un recurso de reconsideración, se deben acusar, como una proposición jurídica completa, las decisiones que establecen la liquidación oficial del impuesto y las que niegan el silencio administrativo positivo.

Pese a lo anterior, el precedente ha advertido que en los casos en que la parte accionante no solicita de forma expresa la nulidad de las decisiones que niegan la configuración del silencio administrativo positivo, pero fundamenta su pretensión de

³ CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA Consejero ponente: MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil catorce (2014) Radicación número: 11001-03-27-000-2011-00001-00(18634)

nulidad de la liquidación oficial en la configuración del acto ficto, resulta procedente integrar en las pretensiones de la demanda los pronunciamientos relacionados con el silencio administrativo.

La anterior posición fue ratificada por el precedente de la Sección Cuarta del Consejo de Estado a través de providencia de 16 de julio de 2020⁴ en los siguientes términos:

(...) se reitera que cuando se provoca la decisión de la administración sobre la ocurrencia del silencio administrativo positivo, lo propio, por regla general, es demandar, como una proposición jurídica completa, tanto los actos que formulan la liquidación oficial del impuesto como los que niegan la declaratoria del silencio administrativo positivo ocurrido frente a la resolución que resuelve el recurso de reconsideración.

En el presente caso, a pesar de que no se demandaron los citados oficios, se observa que en el concepto de la violación se alegó la nulidad de la liquidación oficial y del acto que la confirmó, por la ocurrencia del silencio administrativo positivo, por ende, lo pertinente es interpretar que dentro de las pretensiones de la demanda se encuentra incluida la de nulidad de los Oficios Nos. 2014EE412887 del 10 de diciembre de 2014 y 2014EE419394 del 23 de diciembre de 2014, proferidos por el Jefe de la Oficina de Recursos Tributarios de la Secretaría Distrital de Hacienda y, en consecuencia, se debe decretar su nulidad, porque como se analizó con anterioridad, en este caso, sí opero el silencio administrativo positivo. (...)

1.4.2. Caso Concreto.

En el presente caso se advierte que la excepción de caducidad formulada por el municipio de Candelaria se presentó con el escrito de contestación con anterioridad a la reforma de la demanda presentada por la parte accionante que se admitió mediante providencia de 4 de agosto de 2020.

De esta forma al sustentar la excepción la entidad territorial no tuvo en cuenta que en el procedimiento de aforo se proferieron actos administrativos con posterioridad al 23 de abril de 2019 que deben valorarse para el cómputo del término de caducidad.

En este contexto, aunque con el memorial original de la demanda las pretensiones se dirigieron únicamente en contra de las resoluciones de 26 de febrero de 2018 y 23 de abril de 2019 que impusieron una sanción por no declarar el impuesto de industria y comercio durante los años gravables 2011 a 2015, posteriormente con la reforma se acusaron adicionalmente las decisiones referentes a la liquidación oficial del tributo.

La anterior actuación evidencia que la demanda se presentó el 19 de septiembre de 2019 dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expedición de la Resolución N° 245.10.001-1507 de 24 de julio de 2019 por medio de la cual se resolvió el recurso de reconsideración formulado en contra de la resolución de aforo y de la expedición de la Resolución N° 245.10.01-1554 de 27 de agosto de 2019 que negó la solicitud de declaratoria del silencio administrativo positivo.

En conclusión, se negará la excepción de caducidad formulada por la parte accionada.

⁴ CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA Consejero ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO Bogotá, D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 25000-23-37-000-2015-00800-01(23864)

1.5. Declaratoria de oficio de la excepción de inepta demanda.

Aunque los argumentos expuestos por la entidad territorial accionada resultan insuficientes para declarar probada la excepción de caducidad de la acción, el análisis de los actos administrativos proferidos en el procedimiento de aforo permite inferir que en el presente caso se configura una falta de agotamiento de los recursos que debieron formularse en sede administrativa.

Sobre el agotamiento de los requisitos previos en sede administrativa como presupuesto procesal para demandar, el artículo 161 del CPACA establece:

(...) Artículo 161. Requisitos previos para demandar. La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:

(...) 2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios. El silencio negativo en relación con la primera petición permitirá demandar directamente el acto presunto.

Si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los recursos procedentes, no será exigible el requisito al que se refiere este numeral. (...)

El artículo 720 del Estatuto Tributario estableció en relación con los recursos procedentes en sede administrativa lo siguiente:

(...) Artículo. 720. Recursos contra los actos de la administración tributaria. Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales de este Estatuto, contra las liquidaciones oficiales, resoluciones que impongan sanciones u ordenen el reintegro de sumas devueltas y demás actos producidos, en relación con los impuestos administrados por la Unidad Administrativa Especial Dirección General de Impuestos Nacionales, procede el Recurso de Reconsideración.

El recurso de reconsideración, salvo norma expresa en contrario, deberá interponerse ante la oficina competente, para conocer los recursos tributarios, de la Administración de Impuestos que hubiere practicado el acto respectivo, dentro de los dos meses siguientes a la notificación del mismo. Cuando el acto haya sido proferido por el Administrador de Impuestos o sus delegados, el recurso de reconsideración deberá interponerse ante el mismo funcionario que lo profirió.

Parágrafo. Cuando se hubiere atendido en debida forma el requerimiento especial y no obstante se practique liquidación oficial, el contribuyente podrá prescindir del recurso de reconsideración y acudir directamente ante la jurisdicción contencioso administrativa dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación de la liquidación oficial. (...)

Conforme a lo dispuesto por la norma transcrita, contra las liquidaciones oficiales, las resoluciones que impongan sanciones u ordenen el reintegro de sumas devueltas **y los demás actos producidos en relación con los impuestos** procede el recurso de reconsideración.

Con base en los artículos 732 y 734 del Estatuto Tributario, el silencio administrativo positivo opera si dentro del término de un año la Administración no ha resuelto el recurso bajo análisis.

En desarrollo de lo anterior el precedente de la Sección Cuarta del Consejo de Estado ha señalado que el agotamiento del recurso de reconsideración constituye un requisito previo y de carácter obligatorio para acudir a la Jurisdicción de lo

Contencioso administrativo en aplicación de lo previsto por el artículo 161 de CPACA.

En providencia de 5 de marzo de 2020⁵ se advirtió que el artículo 720 del Estatuto Tributario constituye una norma procesal de orden público y de obligatorio cumplimiento que permite a la administración revisar su actuación:

(...) En tales condiciones, para la Sala no era dable acudir directamente ante la jurisdicción contencioso administrativa, pues la interposición del recurso de reconsideración, se rige por lo dispuesto en los artículos 104 del Decreto 807 de 1993, 720 del Estatuto Tributario y 161 numeral 2 del CPACA, normas procesales de orden público y de obligatorio cumplimiento, las cuales en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley, toda vez que su aplicación materializa los derechos a la igualdad y al debido proceso.

Además, cabe anotar que la sociedad contribuyente en el recurso de reconsideración podía exponer las inconformidades relativas al trámite de notificación del requerimiento especial, y así permitir a la Administración revisar su actuación. (...)

Esta posición fue reiterada en un pronunciamiento del 17 de septiembre de 2020⁶, bajo los siguientes parámetros:

(...) Por regla general, en el caso de los actos administrativos de contenido tributario, el recurso obligatorio para agotar la vía gubernativa es el de reconsideración (artículo 720 del ET), tal como lo ha señalado la jurisprudencia de la Sección Cuarta (entre otras, las sentencias del 21 de junio de 2012, exp. 12382, CP: María Inés Ortiz Barbosa, y del 18 de mayo de 2017, exp. 21002, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto, entre otras), del cual solo se puede prescindir, para efectos de acudir a la jurisdicción, cuando se trata de liquidaciones oficiales de tributos con la condición de que «se hubiere atendido en debida forma el requerimiento especial» (parágrafo del artículo 720 ídem). Así, para los actos que imponen sanciones, el recurso es obligatorio, so pena de que no se puedan demandar, por falta de agotamiento de la vía gubernativa. (...) subrayado por el Despacho.

Sobre la aplicación del artículo 720 del Estatuto Tributario y la obligatoriedad del recurso de reconsideración en los procedimientos tributarios adelantados por las entidades territoriales el Consejo de Estado en providencia de 11 de abril de 2019⁷ se sostuvo lo siguiente:

(...) 3- En cuanto a la excepción de inepta demanda, por no interposición del recurso obligatorio, debe recordarse que, conforme con el numeral 2º del artículo 161 del CPACA, cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular, el interesado deberá acreditar que ejerció y que se decidió el recurso que, según la ley, es obligatorio.

En relación con la conclusión del procedimiento administrativo, conviene precisar que el artículo 87-2 ibidem prevé que los actos administrativos quedan en firme desde el día

⁵ CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veinte (2020) Radicación número: 25000-23-37-000-2019-00022-01(24787)

⁶ CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA consejero ponente: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ Bogotá, D. C., diecisiete (17) de septiembre dos mil veinte (2020) Radicación número: 25000-23-27-000-2012-00465-01(20491)

⁷ CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA Consejero ponente: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ Bogotá D.C., once (11) de abril de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 05001-23-33-000-2018-01108-01(24373)

siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos.

Ahora bien, en materia de procedimiento tributario, el artículo 59 de la Ley 788 de 2002 establece que las entidades territoriales deben aplicar los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional, para la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio incluida su imposición, a los impuestos por ellos administrados.

En línea de lo anterior, el artículo 720 del ET dispone que contra las liquidaciones oficiales, resoluciones que impongan sanciones y demás actos proferidos por la DIAN (para el caso, la autoridad de impuestos territorial), procede el recurso de reconsideración. La interposición del recurso de reconsideración con el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 722 del ET no es optativa, salvo las disposiciones legales que expresamente señalen su prescindencia (Sentencia del 5 de diciembre de 2018, exp. 22970, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez) (...)

Del precedente transcrito se extraen las siguientes subreglas de interpretación que resultan aplicables al caso concreto:

- El recurso de reconsideración es procedente para controvertir la totalidad de decisiones adoptadas “*en relación con los impuestos*” salvo norma especial que señale lo contrario.
- El artículo 720 del Estatuto Tributario es aplicable a los procedimientos adelantados por las administraciones de impuestos territoriales.
- La falta de agotamiento del recurso de reconsideración en contra de una decisión de naturaleza tributaria conlleva a la configuración de la excepción de inepta demanda en aplicación de lo previsto por el numeral 2 del artículo 161 del CPACA.
- No existe una norma especial que releve al contribuyente de formular el recurso de reconsideración en contra de un acto administrativo que niega la configuración del silencio administrativo positivo.

Bajo los parámetros expuestos se tiene que en el caso concreto mediante la Resolución N° 245.10.01-1554 de 27 de agosto de 2019 se negó la solicitud de declaratoria de silencio administrativo positivo formulada por la parte accionante por la falta de respuesta oportuna frente al recurso de reconsideración radicado el 14 de junio de 2018 en contra de la resolución sanción de 26 de febrero de 2018.

En el numeral cuarto de la parte resolutive de la decisión se estableció que en su contra procedía el recurso de reconsideración dentro de los 2 meses siguientes a su notificación.

Conforme a los parámetros expuestos, en el presente asunto la interposición del recurso de reconsideración contra el citado acto resultaba obligatoria, pues con ello se cumplía con el requisito de procedibilidad para presentar la demanda.

En efecto, de acuerdo al precedente citado en el numeral 1.4.1. de la presente providencia el acto administrativo que niega el silencio positivo frente al recurso de reconsideración integra la proposición jurídica de las decisiones que se profieren en el procedimiento de aforo y tiene el carácter de definitivo toda vez que se resuelve sobre la procedencia de la sanción impuesta en contra del contribuyente.

En este contexto, una eventual decisión favorable sobre el silencio administrativo positivo implicaba la revocatoria de la resolución sanción como acto previo para la imposición de la liquidación de aforo y por ende tenía el merito suficiente para terminar con el procedimiento de aforo.

De esta forma, teniendo en cuenta la relevancia y los efectos de la decisión frente a la configuración del silencio administrativo positivo resultaba obligatoria su discusión en sede administrativa a través del recurso de reconsideración.

En conclusión, se declarará probada de oficio la excepción de inepta demanda por el incumplimiento del requisito de procedibilidad consagrado en el numeral 2 del artículo 161 del CPACA consistente en la interposición de los recursos obligatorios de ley y en consecuencia en aplicación del inciso 3 del artículo 36 de la ley 2080 de 2021 se declarará la terminación del proceso.

En consecuencia, el **Juzgado Primero Administrativo Oral de Cali**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR la excepción de caducidad formulada por el municipio de Candelaria.

SEGUNDO: DECLARAR probada de oficio la excepción de inepta demanda por falta de agotamiento del requisito de procedibilidad consagrado en el numeral 2 del artículo 161 del CPACA.

TERCERO: DECLARAR terminado el proceso.

CUARTO: Este juzgado acatando el deber consagrado en el artículo 46 de ley 2080 de 2021 que modificó el artículo 186 del CPACA, comunica los canales digitales del despacho y su Oficina de Apoyo, de la siguiente manera:

- ✓ **Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali:**
Correo electrónico: adm01cali@cendoj.ramajudicial.gov.co
Teléfono: (2) 8962433
- ✓ **Ministerio Público – Procuraduría Judicial 57**
Correo electrónico: procjudadm57@procuraduria.gov.co
- ✓ **Radicación de procesos ordinarios:**
repartoadtivoscali@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ✓ **Radicación memoriales:**
of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ✓ **Radicación de tutelas y habeas corpus:** URL
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/TutelaEnLinea>

Las líneas telefónicas de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Cali son:

Teléfonos: (2) 896-24-12
(2) 896-24-11

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

**PAOLA ANDREA GARTNER HENAO
JUEZ**

Firmado Por:

**PAOLA ANDREA GARTNER HENAO
JUEZ
JUZGADO 001 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE CALI-VALLE DEL CAUCA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **a60fc1d6682fbde9e8ae9f20fbe8198d702a9dd30d27c974a27f32430811dbaf**
Documento generado en 25/03/2021 03:34:29 PM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**